**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 00449/INFOEM/IP/RR/2025.**

El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México resolvió por unanimidad de votos, la Resolución relativa **al Recurso de Revisión 00449/INFOEM/IP/RR/2025,** conforme al criterio mayoritario del Pleno**,** respecto de la cual, quien suscribe, emite **Voto Particular**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracción XI, del Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Personales Datos del Estado de México, así como 45 y 48, fracción I, de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno y las Comisiones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Al respecto preciso señalar que se comparte el sentido de la resolución, ya que del análisis de las constancias que conforman el expediente electrónico, se desprendió que la información que se ordena entregar es susceptible de transparentarse, pues se encuentra relacionada con la gestión pública y con su publicidad se favorece indudablemente a la rendición de cuentas.

Sin embargo, es preciso mencionar que, el presente voto se formula en relación con los argumentos señalados en la resolución, particularmente respecto a lo siguiente:

1. **Placas**

En primer lugar, el presente voto se formula en relación a que la información que se ordena, respecto de las unidades vehiculares que brindan atención a emergencias en materia de seguridad pública, protección civil y bomberos, pues se trata de documentos en los que puede constar el número de placas de los vehículos oficiales del **Sujeto Obligado**.

Razón por la que, la suscrita considera que se debió tomar en cuenta que en los documentos que se ordena su entrega, puede contener el número de placas de vehículos asignados a servidores públicos; dato que es susceptible de clasificarse como información reservada; lo anterior, en el caso de que se vincule con el servidor público que lo tiene bajo su uso.

En ese sentido, se considera que toda vez, que los datos de identificación de los vehículos, concretamente respecto del número de placa vinculado con el nombre del servidor público que lo tiene bajo su uso, se trata de información que hace plenamente identificable a un vehículo, siendo altamente posible identificar también a sus tripulantes, procede su reserva.

Lo anterior, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ya que prevé que la clasificación de la información es el proceso mediante el cual el **Sujeto Obligado** determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

En el entendido de que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de autoridad competente o se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley.

Así, excepcionalmente por razones de interés público, se clasificará como reservada aquella información pública que encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 140 de la Ley de la materia, y que para el caso concreto se actualiza el previsto en la fracción IV, esto es ponga en riesgo la vida, seguridad o la salud de una persona física.

En tanto que se clasificará como información confidencial, entre otras y atendiendo al caso que nos ocupa, la información privada, datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable.

De acuerdo con lo anterior y conforme a las actuaciones que integran el expediente electrónico con motivo del recurso de revisión citado al rubro, la información que se ordena entregar; es decir, los documentos en donde conste o se advierta el número de placas de las unidades vehiculares que brindan atención a emergencias en materia de seguridad pública, protección civil y bomberos; información que a criterio de la mayoría de los integrantes del Pleno, se trata de datos que deben dejarse visibles.

Es de precisar que, considero que el número de placas es susceptible de reservase si se vincula con el nombre del servidor público que lo tiene bajo su uso, toda vez que los vehículos, con independencia de que sean particulares o pertenezcan al parque vehicular del **Sujeto Obligado** y son utilizados para el desarrollo de las actividades de los servidores públicos, a diferencia de cualquier otro vehículo utilitario, de manera enunciativa más no limitativa, en ellos asisten a eventos públicos derivados de sus funciones.

Por lo que, proporcionar la información de identificación de un vehículo como el número de placas sí se vincula con el nombre del servidor público que lo tiene bajo su uso, **aun perteneciendo al servicio público, atenta contra la seguridad del personal que en ellos se trasladan.**

Aunado a las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa el país, en el que han proliferado grupos delictivos, que pudieran utilizar esa información para vulnerar la vida, seguridad o salud de dicho funcionario, o entorno social, aumentando, incluso, el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales intenten realizar actos para inhibir o entrometerse en la función pública, situación que puede corroborarse con la incidencia delictiva, que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que en lo toral éste concentra la ocurrencia de delitos registrados en Carpetas de Investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y las Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso del fuero común y la Fiscalía General de la República en el fuero federal.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio 9/2008 que sustenta por unanimidad de votos, el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuenta con el siguiente rubro **SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VEHÍCULOS QUE LES SON ASIGNADOS ES PÚBLICA SALVO POR LO QUE SE REFIERE A LOS DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR CUÁL CORRESPONDE A CADA UNO DE ELLOS,** la cual señala:

*“La asignación de vehículos a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un apoyo que se otorga para coadyuvar en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus responsabilidades; además, tal apoyo se sujeta al presupuesto autorizado y se ejerce en afectación al mismo. En este sentido, los registros administrativos en que consten los datos inherentes a la asignación de vehículos a dichos servidores públicos (marcas y modelos de autos asignados, así como las fechas de asignación y el kilometraje registrado al momento de la misma), en razón del ejercicio de su cargo, son públicos, en términos de lo dispuesto en los artículos 2° y 7°, fracciones IV y IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No obstante,* ***la naturaleza pública de esta información no debe entenderse de manera absoluta, ya que encuentra su excepción respecto del dato consistente en el nombre de los mencionados servidores públicos, pues al relacionarse con los datos del vehículo o vehículos de su asignación, constituye un dato relevante y trascendente en su vida privada, pues los autos que se les otorgan son usados por ellos en apoyo del ejercicio de sus funciones y responsabilidades, las cuales pueden desarrollarse conjuntamente con sus actividades personales y/o privadas****. Por lo tanto, el dato de su nombre relacionado con el de los vehículos de su asignación constituye un dato personal que trasciende a su vida privada que debe ser objeto de protección, ya que su difusión pondría en riesgo el derecho fundamental a la vida privada.”*

Del criterio en cita, se advierte que no debe proporcionarse el número de placa de los vehículos oficiales que utilizan los servidores públicos **si se vincula con el nombre del servidor público que lo tiene bajo su uso,** por hacerlos identificables y trascender a su vida privada, garantizando con ello su protección.

1. **Vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales en Actos Consentidos:**

Por otro lado, es de señalar que el **Sujeto Obligado** en respuesta proporcionó, entre otros documentos, un archivo electrónico denominado “***00016.pdf***”, en el que entregó dos licencias de conducir de los servidores públicos que operan dos ambulancias; las cuales no fueron impugnadas, pues el Particular sólo se inconformó porque no le fue proporcionada, entre otra, ese mismo tipo de información pero respecto de otras unidades vehiculares de emergencia con que cuenta el Ayuntamiento de Chicoloapan; razón por la cual se invocó la figura jurídica de actos consentidos.

Con base en el expediente, se realizó el análisis de los datos no clasificados y de la información faltante, por lo que se invocó la figura jurídica de actos consentidos. A partir de tales actuaciones se consideró procedente dar vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales; al haberse dejado a la vista datos personales confidenciales, sin embargo, dichas documentales no formaron parte del análisis de la resolución.

Al respecto, es preciso mencionar que, si bien se comparte el sentido de la Resolución emitida en virtud de que procede ordenar la información faltante, no coincido en el sentido de dar vista al área de Datos Personales de este Instituto, máxime de que los documentos por los cuales se da la vista no fueron impugnados, ni formaron parte del estudio.

Determinación que constituye el motivo para la emisión del presente Voto Particular Concurrente, toda vez, que conforme a los artículos 1°, 7°, 29, 36 fracciones II, XVI, XXI,XXII, XXVII y XXXVIII; 176, 185, 186, 188, 195, 198, 199, 200, 214, 216 y 220, fracción XIX de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, esta tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados, del mismo modo precisa que este Instituto es un Organismo Público Estatal constitucionalmente autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública conforme a los principios y bases establecidas en la Constitución Federal, Constitución Local, Ley General, así como lo previsto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En ese sentido, es de resaltar que el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública, en donde las resoluciones de este Organismo Garante pueden:

* Desechar o sobreseer el recurso
* Confirma la respuesta del sujeto obligado
* Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y
* Ordenar la entrega de la información

Cabe agregar que las resoluciones que pronuncie este Instituto deben contener cuatro aspectos importantes:

* Lugar, fecha, el nombre del recurrente y del tercero interesado en su caso, sujeto obligado y un extracto de los hechos cuestionados;

* Los preceptos en que se fundamenten y las consideraciones que las sustenten;

* Los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, en su caso, los sujetos y órganos obligados a cumplirla; y

* Los puntos resolutivos.

Sobre este punto, se considera de suma importancia mencionar que, de la normatividad citada, se advierte que este Instituto está facultado entre otras cosas para:

* *Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito estatal;*

* *Realizar de oficio y a petición de parte, análisis y recomendaciones o en su caso, lineamientos en relación con presuntos incumplimientos a las disposiciones de la Ley, cuando existan elementos suficientes a juicio del Pleno del Instituto;*

* *Emitir comunicados públicos sobre el incumplimiento de sus resoluciones o por infracciones reiteradas a la Ley, en el ámbito de su competencia;*

* *Ordenar a los sujetos obligados la ejecutoría en la entrega de información en términos de la presente Ley;*

* *Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;*

* ***Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones*** *previstas en la Ley y en las demás disposiciones aplicable.*

Establecido lo anterior, debe tomarse en cuenta que la vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales de este Instituto, no debió incluirse en los resolutivos de la resolución referida, toda vez que, el Particular no se inconformó sobre de la información proporcionada en respuesta, es decir, no forma parte de la litis (por Litis es un vocablo latino que en idioma español se traduce como litigio, significando disputa o controversia judicial; diferencia de intereses entre dos partes, llamadas litigantes, sometidas a decisión de un Juez) y por lo tanto no se analizó la documentación entregada al invocar actos consentidos, así en el presente asunto, la vista en mención debe realizarse y tramitarse por cuerda separada, en caso de advertirse que es necesario.

Aunado a lo anterior, respecto los actos consentidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación con el diverso 195, fracción IV, de Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece que será improcedente el recurso contra los actos que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por éstos cuando el recurso no se haya promovido en el plazo señalado para el efecto.

De la misma manera resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación de rubro **ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE**, Tesis VI.2o. J/21, emitida en la novena época, por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en agosto de 1995, página 291 y número de registro 204707, del que se desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos.

En ese sentido, en el caso de que el Particular no haya manifestado su inconformidad en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por consentido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agravio en su contra, por lo que, en la especie, se valida la respuesta respecto de los puntos no controvertidos y se arriba a la conclusión de que estos quedaron firmes, tal como fue realizado, sin embargo, al no haber inconformidad ni estudio sobre las documentales remitidas en respuesta, resulta innecesario la vista citada.

Lo anterior expone razones suficientes para la emisión y presentación del presente **Voto Particular** relacionado con la resolución del Recurso de Revisión referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------